

Revista APORTES

*para el Estado y la
Administración Gubernamental*

Una aproximación al golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela y a sus causas

Margarita López Maya(*)

Un primer paso para analizar y evaluar la crisis política que hoy aflige a la sociedad venezolana consiste en reconstruir del modo más preciso y serio posible lo acaecido entre el 11 y el 14 de abril pasado y comenzar a sistematizar los procesos que la causaron. En este artículo se ensaya esa tarea. En la primera parte se hace una interpretación de lo ocurrido desde el 11 hasta el 14 de abril a partir de diversas fuentes hemerográficas. En la segunda, se intenta una inicial aproximación sistematizada a las causas que concurrieron para precipitar la ruptura constitucional.

La reconstrucción histórica de lo sucedido entre el 11 y el 14 de abril debe considerarse preliminar, en virtud de lo reciente de los acontecimientos y de su intensidad. Sin embargo, se ha tenido el cuidado de confrontar entre sí diversas fuentes hemerográficas para cumplir con los requisitos metodológicos de la disciplina histórica. La información utilizada procede de seis periódicos, 4 nacionales y dos extranjeros: *El Nacional*, *El Universal*, *Tal Cual*, *El Nuevo País* (tomando exclusivamente la versión de la periodista Patricia Poleo), *El País* (España) y *La Jornada* (México). Adicionalmente, se han bajado desde portales de diverso signo ideológico algunas informaciones del internet de esos días y de los siguientes.

I. Los Sucesos

El día 11

El golpe de Estado del 11 de abril tuvo como desencadenante directo el paro laboral de los empleados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la industria petrolera propiedad del Estado venezolano, motivado por el nombramiento de una nueva directiva para la empresa que en febrero último realizara el Ejecutivo Nacional. El paro petrolero fue apoyado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que el 9 de abril llamó a una huelga de 24 horas en solidaridad con la empresa. El paro de la CTV contó con el apoyo explícito de los sectores empresariales representados en Fedecámaras, así como de la iglesia católica representada por el Episcopado Venezolano. El paro tuvo ese martes 9 sólo un éxito parcial, pues a diferencia del paro cívico del 10 de diciembre del pasado año (v. López Maya, 2002), no logró paralizar el transporte colectivo, el servicio bancario, los centros de acopio y distribución de víveres y alimentos a los mercados mayores y menores de la ciudad capital ni otros varios servicios. En otras ciudades del país, la situación era similar, con más o menos paralización de comercios y abastos y de algunos servicios como el de educación privada, pero la huelga carecía de la contundencia del 10 de diciembre. El paro no evidenciaba capacidad para mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo, la directiva de la CTV, en lo que pareció una decisión temeraria, prolongó en la tarde del 9 este paro por 24 horas más. El miércoles 10, el paro seguía sin expresar contundencia; tampoco la manifestación convocada frente a la CTV. Sin embargo, esa tarde, los dirigentes de la confederación sindical llamaron sorprendentemente a una huelga general indefinida. Aunque es sabido, vale la pena enfatizar que una huelga general indefinida tiene un carácter insurreccional. Con esa decisión, la CTV -como representante de los trabajadores sindicalizados- se declaraba en rebelión total frente al gobierno.

La decisión insurreccional de la CTV contó con el amplio respaldo de sectores empresariales organizados y de una gama de organizaciones sociales de clase media y alta y de partidos políticos opositores. El partido Primero Justicia, por ejemplo, en boca su dirigente Leopoldo Martínez, dijo: *Vamos hasta el final, hasta que caiga [el presidente Chávez]*; Cipriano Heredia de la organización social Visión Emergente declaró: *estamos aplicando los artículos 333 y 350 de la Constitución, porque el gobierno se ha salido de su cauce constitucional con lo que hizo contra los medios y el allanamiento contra AD (El Universal 11-04-02)*¹. La Coordinadora por la Democracia y la Libertad, que estas organizaciones habían constituido para pedirle la renuncia a Chávez, convocó a una marcha desde el Parque del Este de la ciudad de Caracas hasta la sede de Pdvsa en Chuao, también ubicada en el este de la ciudad, para la mañana del jueves 11.

Hacia las 10 a.m. del 11 de abril, se inició una nutrida marcha que hizo el recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de Pdvsa en Chuao, los convocantes (Fedecámaras, la CTV y algunos dirigentes de las otras organizaciones sociales), animados por las dimensiones de la marcha, instaron a la multitud a dirigirse al Palacio Presidencial de Miraflores para, como lo señaló Carlos Ortega, presidente de la CTV, *sacar a Chávez*. La marcha, el mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informadas, convocadas y cubiertas por los canales privados de televisión. De manera que ésta fue creciendo a

medida que avanzaba hacia el centro de Caracas. Como quien convoca a un concierto o a una fiesta, los canales pasaban la propaganda gratis para que todos los venezolanos concurrieran a la insurrección. Porque esta marcha también tenía evidente naturaleza insurreccional: se estaba haciendo sorpresivamente y sin ningún permiso dentro de una huelga general indefinida.

El adversario, el gobierno constitucional, la autoridad, está en Miraflores, rodeado por simpatizantes que hacen su tercer día de vigilia desde que estallara el paro laboral, protegiendo al Presidente. Al anunciarse que la marcha opositora prosigue a Miraflores, el partido de gobierno -el Movimiento Quinta República (MVR)- comienza a convocar de urgencia a sus simpatizantes y militantes para que su presencia impida a la oposición llegar a las puertas del palacio. Los ánimos, a diferencia de la fiesta que se desarrolla en el este de la ciudad, son de creciente ira, posiblemente mezclados con sentimientos de temor: las sólidas manifestaciones pro-gobierno de los últimos meses fueron pobremente reseñadas por los medios de comunicación impresos o audiovisuales. En contraste, las protestas opositoras recibieron siempre amplia cobertura audiovisual y se agigantaron en los diarios impresos. Las encuestas publicadas muestran una baja sorprendente de la popularidad del gobierno. Los pronunciamientos militares de los últimos meses corroboran que en los cuarteles hay inquietud y rebelión. Los simpatizantes del Presidente están resentidos. Se agolpan alrededor de Miraflores con gritos de confrontación: *No pasarán*, repiten.

Al entrar la marcha opositora al centro de Caracas (aproximándose al palacio presidencial), comienzan los disturbios. Hacia las 2.00 pm las multitudes prochavistas tiran piedras y palos hacia el hotel Edén, ubicado junto al Palacio de Miraflores, y desde donde aparentemente francotiradores apostados en la terraza están atacándolos (*Tal Cual*, 17-04-02). A esa misma hora, en el edificio de La Nacional, en puente Llaguno, un poco más allá del palacio y donde hay oficinas de la alcaldía Libertador que gobierna el MVR, los empleados no pueden salir por la violencia desatada en la calle. En la terraza de este edificio también se apostan francotiradores (id.). Aparecen personas armadas en ambos lados de la confrontación callejera; la violencia se desata y, al finalizar la tarde, el número de muertos pro y anti-chavistas alcanza a 19 (*El Universal*, 27-04-02).

Estamos ya claramente en el golpe de Estado. Las informaciones de los días siguientes revelan que, a las 2.30 pm -cuando comenzaba la confrontación en la calle-, un grupo de militares encabezados por el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez ensaya en una oficina en Chacao el pronunciamiento que difundirían por los medios de comunicación desconociendo al gobierno y al Presidente (*El Nacional*, 13-04-02). Se trata, informa el diario, de un grupo de militares que se viene reuniendo desde hace meses, disgustados con la política del gobierno, especialmente por su acercamiento a Cuba y a países como Irak e Irán que ha provocado tensiones con los EE.UU. La comunicación de estos militares saldría al aire a las 7 de la noche, pues fue retardada por la cadena del Presidente, que comenzó poco antes de las 4.00 pm. Los medios audiovisuales, al comenzar la cadena del Presidente deciden -también en clara rebeldía- dividir la pantalla, como lo habían hecho el día anterior, para mostrar los disturbios que se suceden en el centro de Caracas. El Presidente anuncia que sacará del aire a los medios privados, pero éstos siguen transmitiendo vía señal de cable. La alocución presidencial también es sabotada por un ruido que interfiere el audio. Al terminar la cadena, el dirigente copeyano y hombre del Opus Dei, José Rodríguez Iturbe, exhorta por el canal 10 a los militares a salir de sus cuarteles y terminar el trabajo que los civiles han comenzado con un costo de sangre. A las 7.00 pm sale al aire el video del vicealmirante Ramírez y su grupo. Poco más tarde se transmite un pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, quien informa que su arma no acatará órdenes presidenciales. Hacia las 8.00 pm el ex hombre fuerte del gobierno de Chávez y del MVR, Luis Miquilena, pide por los medios una salida institucional a la crisis y dice que Chávez tiene las manos ensangrentadas (*El País*, 7-05-02). A esa hora, los generales Manuel Rosendo y Hurtado Soucre negocian con Chávez su salida y amenazan con bombardear el palacio de Miraflores (Istúriz en *La Jornada*, 17-04-02). A las 10.00 pm el canal del Estado es forzado a cesar sus emisiones. A la 1.10 am del 12 los medios comienzan a informar que Chávez se ha entregado a los militares rebeldes. Pasadas las 3.00 am el general en jefe de la Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero, anuncia que Chávez ha renunciado. Cerca de las 4.00 am el presidente sale de Miraflores hacia el Fuerte Tiuna, sede principal de las Fuerzas Armadas en Caracas, con la Escolta Presidencial. Allí lo recibe el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Baltasar Porras. A las 4.15 am, Carmona anuncia que asumirá la presidencia de Venezuela al frente de un gobierno de transición cívico-militar.

El día 12

Por informaciones publicadas tras el retorno del presidente Chávez, se sabe que a la misma hora en que Carmona se posesionaba del cargo de Presidente comenzaban los problemas entre los diversos actores que contribuyeron a la caída del gobierno constitucional. Parece que el presidente de la CTV y el general comandante del Ejército fueron los primeros en percibir que el golpe militar no respondería a sus expectativas (*El Nuevo País*, 17-04-02). Los intereses que querían prevalecer poco o nada tenían que ver con la democracia y la participación, razón pública esgrimida para ejecutar o apoyar el golpe según casi todos sus protagonistas. Por un lado, constitucionalistas de fama redactaban un decreto autoritario como pocas veces se ha visto en la historia del país; por otro, en nombre de la llamada *masacre de El Silencio*, se iniciaba una cacería de brujas contra las autoridades del régimen caído. Acompañados por turbas enardecidas, alcaldes del partido Primero Justicia sacaban de sus moradas de modo humillante a funcionarios del gobierno anterior. A las 5.30 pm, tras el autojuramento de Carmona y la emisión de su primer decreto, la situación estaba clara: la salida de Chávez conducía a la sociedad hacia un gobierno de facto de extrema derecha, una plutocracia que cambiaba el nombre de la república, disolvía los poderes públicos, suspendía la venta de petróleo convenida con Cuba, allanaba sin orden judicial, suspendía las 49 leyes de la Habilitante, anulaba el aumento de sueldos y salarios decretado por el gobierno derrocado. En pocas palabras: estábamos sin estado de derecho. Ante la evidencia de que Venezuela caminaba apresuradamente hacia un retroceso de todos sus logros en el siglo XX como sociedad democrática y civilizada, la resistencia que venía evolucionando tímidamente ese día 12 se hizo patente al caer la noche. Caracas fue sacudida por una cacerolazo descomunal que se oía en los barrios populares del oeste de la ciudad, al tiempo que frente al Fuerte Tiuna comenzaron a reunirse, sin que mediara convocatoria de los medios de comunicación, multitudes que exigían ver a Chávez y que él les dijera *que había renunciado*. También se producían disturbios y tiroteos en esta zona de Caracas. Poco después de la alocución del ahora dictador Carmona, un medio de comunicación comunitario alternativo, radio Fe y Alegría, entrevistó al ministro de

Educación depuesto, Aristóbulo Istúriz, quien contó las últimas horas de Chávez en el palacio presidencial y señaló claramente que éste no había renunciado. Quienes habían apoyado la insurrección de la víspera no salieron a defender a su gobierno. Así las cosas, los sectores populares tomaron las calles y cerraron las vías de acceso a Caracas para exigir el retorno de las instituciones y del Presidente. En otras ciudades también ocurrían sorprendentes movilizaciones.

Restituida la institucionalidad

Desde la mañana del sábado 13, se torna crítica la situación del nuevo gobierno. Carmona se reúne con su gabinete provisorio y los medios de comunicación. Estos últimos le piden que rectifique el decreto dictatorial e incorpore a la CTV a las reuniones del poder. Se sabe ya que el general Raúl Isaías Baduelli, comandante del batallón de paracaidistas del Ejército, está en rebeldía en la base militar de la ciudad de Maracay, la principal del país, así como que están alzándose otras guarniciones. Las multitudes frente al Palacio de Miraflores están creciendo. En el Fuerte Tiuna, el comandante de la Tercera División de Infantería, general García Carneiro, sale en tanqueta hacia El Valle, en la zona sur de Caracas, gritándole a la multitud: *¡Soy un soldado y estoy con Chávez!* (*El Nuevo País*, 18-04-02). Al mediodía comienzan a llegar a Miraflores los designados ministros del nuevo gobierno para prestar juramento. Algunos quedan atrapados en la sede gubernamental porque el contragolpe está en franco desarrollo, se da orden de evacuar el edificio y la Guardia de Honor del palacio se alza, mandándole señas a la multitud en la calle de que está con ella. A partir de ese momento, poco después del mediodía, los ministros del gabinete de Chávez comienzan a llegar a Miraflores. Carmona se va al Fuerte Tiuna. A las 3.30 pm el comandante en jefe del Ejército sale de nuevo, como el día 11, por una cadena de los medios para anunciar que su arma sólo apoyará al nuevo gobierno si cumple ciertas condiciones, entre ellas modificar el decreto dictatorial y mantener las políticas sociales del gobierno de Chávez. Cuando Carmona anuncia que se reformará el decreto cuestionado, ya es muy tarde. Mientras los medios de comunicación pasan una programación regular, como si nada pasara en el país, los cuatro costados de acceso a Caracas están cortados, los sectores populares marchan hacia Miraflores desde el este, el sur y el oeste, hay saqueos en distintas zonas, las guarniciones se van sumando al contragolpe y, uno a uno, van llegando a Palacio los ministros del gobierno depuesto. Los medios de comunicación internacionales informan, mediante entrevistas con el Fiscal General y la esposa de Chávez, que el Presidente no ha renunciado y que está preso. A las 8.00 pm las fuerzas del gobierno constitucional retoman el canal del Estado e informan que controlan Miraflores desde el mediodía. A las 10.00 pm Carmona renuncia y a las 3.30 de la madrugada del día 15 el Presidente regresa en helicóptero a Miraflores para retomar el poder. Dirige unas palabras a la multitud que lo espera desde temprano y les hace gestos de que se vayan a dormir.

II. Las Causas del Golpe y de la Actual Crisis Política

De este recuento hecho con la información hasta ahora disponible quedan nítidamente expuestos tres rasgos significativos de la crisis política abierta con el golpe de Estado del 11 de abril: el primero es que el golpe militar que depone a Chávez es precedido por una insurgencia civil contra la autoridad electa constitucionalmente. Esta insurrección tiene como protagonistas a sectores empresariales organizados, la alta gerencia de Pdvsa, sectores medios y altos organizados en lo que ellos llaman la *sociedad civil*, trabajadores sindicalizados en la CTV, jerarquía de la iglesia católica, medios de comunicación privados y partidos políticos de oposición. El segundo rasgo es que el golpe militar que derroca al Presidente, aunque sigue teniendo importantes aspectos desconocidos, no es un sólo golpe; hay -al menos- dos sublevaciones militares distintas: una que viene de la Armada encabezada por Ramírez Pérez y que lleva meses gestándose, y otra, la que en definitiva da el golpe, decidida por altos mandos del Ejército seguidos luego por altos mandos de la Guardia Nacional. Aunque no se descarta, no está claro que ambos sectores estuvieran relacionados. El tercer rasgo es que el gobierno es repuesto por la acción simultánea de un contragolpe militar, promovido por sectores castrenses -entre los cuales tiene importante participación el mismo Ejército que dio el primer golpe- y por la movilización de sectores populares organizados y espontáneos, partidos políticos del oficialismo, medios de comunicación internacionales y nacionales alternativos y la presión de gobiernos y organismos internacionales, especialmente la OEA.

A partir de esta evidencia, el análisis de las causas de esta crisis política debe responder a dos preguntas análogas y cruciales ¿por qué, por una parte, grupos civiles de peso decidieron emprender los días 10 y 11 una insurrección abierta contra un gobierno legítimamente constituido? O, puesto de otra manera, ¿por qué, como lo afirmaban reiteradamente desde días anteriores al golpe, estos sectores consideraban ilegítimo al gobierno? La otra, tan crucial como ésta, ¿por qué otro grupo significativo de civiles se movilizó para reponer el gobierno de Chávez poniendo en peligro incluso sus vidas? Para ellos no sólo era legal el gobierno depuesto sino legítimo. La participación civil en el golpe y en el contragolpe es el meollo de la crisis política que padecemos. Y sólo comprendiendo por qué la sociedad venezolana se fracturó en posiciones antagónicas, podremos tomar los caminos correctos para superar en democracia y paz la situación en que nos hallamos.

Los golpes y la crisis política que generaron los acontecimientos de abril responden a una causalidad compleja, cuya trama se ha tejido en la dinámica de procesos sociohistóricos y sociopolíticos que poseen distintas temporalidades:

- Desde una perspectiva socioeconómica, Venezuela atravesó más de dos décadas de recesión económica y empobrecimiento social. Este empobrecimiento ha sido brutal, creciente y sostenido, medido con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica de una sociedad. Es un caso paradigmático en América Latina (véase López Maya y Lander, 2001).
- Además, se ha producido una polarización social creciente derivada tanto de la recesión económica como de la aplicación de políticas económicas neoliberales regresivas en términos de distribución del ingreso. En el transcurso de estos años, los venezolanos pobres y empobrecidos han percibido que la suya es una sociedad de ricos y pobres con escasa posibilidad de movilidad y ascenso social.

- El resentimiento social ha sido, entonces, una consecuencia inevitable, si se recuerda que desde 1958 esta sociedad se dio un orden democrático que, al momento de emerger, no sólo era concebido como un orden de libertades públicas, sino como un orden que promovía mayores grados de equidad y justicia social. Esta idea de democracia aún encuentra fuertes raíces en el pueblo venezolano. Que esto ya no se cumpla, ha resquebrajado fuertemente las bases de legitimación de la democracia en Venezuela. En este escenario se movieron con relativo éxito no sólo los actores de esta crisis política, sino también los actores de la ocurrida entre 1992 y 1993. Este es el escenario de fondo, el caldo donde se cultivan los golpes contra la democracia.

- Un libro clásico de la sociología publicado en 1978 por Barrington Moore jr., titulado *La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía*, explica que toda sociedad establece los límites que, en aras de la convivencia, se imponen a quienes gobiernan y a quienes son gobernados. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución, o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan a la rebeldía. En Venezuela vivimos tiempos de indignación moral y sentimientos de injusticia. Los límites establecidos para la convivencia social han sido violados por las condiciones socioeconómicas que padecen las mayorías. Pero también por factores sociopolíticos que, en última instancia, explican por qué algunos actores optan por una rebeldía que quiebra la institucionalidad democrática.

- En los '90, la polarización social señalada encontró su expresión política en actores y proyectos también polares que hasta hoy se muestran incapaces de reconocerse, de respetarse entre sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes en la lucha por alcanzar el predominio político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive lo que Gramsci conceptuó como una lucha hegemónica, en la que actores con proyectos sociales distintos buscan predominar, recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau, 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica (1992 y 2002 para ser precisos) estos actores decidieron tirar el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Afortunadamente hasta ahora, ninguno tuvo éxito.

- A partir de 1998, según las reglas democráticas establecidas, Chávez y la alianza de fuerzas conocida como *Polo Patriótico* alcanzaron en elecciones transparentes el predominio político para gobernar. La sociedad venezolana ratificó a estos mismos actores y a su proyecto en el referéndum constitucional de 1999 y en las elecciones de 2000 que así consolidaron su hegemonía. Chávez y su alianza política representan principal, aunque no exclusivamente, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que aspiran a la inclusión y a la justicia social. Son la expresión política de ese polo social. Sus adversarios, con distintos matices e ideologías, recibieron el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan al otro polo social, por el momento no hegemónico.

- Si bien la actual polarización política tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellas se esconden, hay -sin embargo- factores adicionales que a mi modo de ver han llevado la confrontación legítima a un antagonismo extremo que hace peligrar la posibilidad de una salida democrática mediante la cual se restablezca la convivencia social pacífica entre los venezolanos. Por un lado, desde que Chávez asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno ha alterado las reglas de la convivencia social venezolana anterior, en el sentido que Moore le da al término: ha aprobado leyes medulares para su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático; ha hecho uso de símbolos de fuerza y amenazas para amedrentar a la oposición cuando ésta ejerció su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que en los tres años de gobierno de Chávez la represión del Estado a estas movilizaciones ha sido notoriamente baja en contraste con las prácticas de gobiernos previos; ha recurrido permanentemente a un discurso de pugna, discriminatorio y ofensivo con el que descalifica a sus opositores y los expone al escarnio público; ha buscado penetrar organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección, de mantener la paz social.

- Por otra parte, muchos de los actores sociales y políticos de la oposición se radicalizaron ante esta conducta gubernamental, y convocaron a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respalda. Estos sectores, en medio de su resentimiento, secundados por medios de comunicación -también polarizados y radicalizados- y por encuestas de opinión que en su mayoría también estaban polarizadas hacia la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su óptica, se trataba de una insurrección popular mayoritaria, por no decir unánime. Según estos grupos, el gobierno no tenía piso político. Pero, como se patentizó en el recuento anterior, esto era un craso error de diagnóstico.

- ¿Por qué la oposición no percibía al otro, a los sectores populares que seguían dándole un sólido respaldo a Chávez y a su proyecto político? Aquí jugó papel central la calidad de las organizaciones sociales y políticas de oposición. O, quizás habría que decir con más propiedad, la calidad de sus dirigentes. Fedecámaras, la CTV, los medios de comunicación privados, la alta gerencia de Pdvsa, las diversas organizaciones que se autodenominan *sociedad civil*, inclusive los partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como Copei, siguen concepciones doctrinarias que exaltan las virtudes del ámbito privado, mientras colocan todos los vicios de la vida en sociedad en el ámbito público, en el Estado. Muchos de ellos, organizaciones sociales y medios de comunicación se han fortalecido en Venezuela como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos que se convirtió en sentido común en los '80 y '90. El discurso democrático de estas organizaciones se agota rápidamente, como lo corroboramos en su respaldo inicial a un golpe de Estado, toda vez que -salvo la CTV- son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la solidaridad social. Son organizaciones concebidas, en palabras de Edgardo Lander, para la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los

que no tienen (1995:135). De manera que les resultan irrelevantes o incluso inexistentes las organizaciones populares cuya concepción de ciudadanía no puede sino ser distinta, porque en ellas se trata de luchar por el cambio. Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por los otros como no ciudadanos y como amenazas a la propiedad y a la seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, etc. para referirse a ellos. Este no es el caso de la CTV, procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso eleccionario que los llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se plegó a las concepciones de esta llamada *sociedad civil* y tuvo responsabilidad central en el golpe.

La ceguera de la oposición le hizo el juego a poderosos intereses que no creen en la democracia ni se interesan por ella, llevando al quiebre institucional y a la salida plutocrática. Porque el 11 de abril no se estaba ante la presencia de una revuelta popular, al estilo de las que derrocaron el socialismo realmente existente en algunos países de Europa Central. O más recientemente, la revuelta popular que condujo a la renuncia del presidente De la Rúa en Argentina a fines del año pasado. Estos gobiernos y el Estado mismo que representaban habían perdido toda legitimidad, las insurrecciones allí reflejaban una carencia total de piso político. Esa no era la situación de Chávez y su alianza política. En este caso presenciábamos una gigantesca protesta de la oposición, en rechazo a políticas de un gobierno que venía violando tradicionales normas de convivencia social. Pero el gobierno seguía siendo legítimo para otra gigantesca porción de la sociedad. Ello se veía alrededor del Palacio de Miraflores, pero no era percibido por esta otra *sociedad civil*, por las carencias teóricas y prácticas de organizaciones inadecuadas para la representación y mediación entre Estado y sociedad. Tal situación fue aprovechada por intereses oscuros y poderosos, de carácter nacional e internacional, que forman parte de la hegemonía neoliberal del contexto mundial. Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre los ha habido y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la sociedad también. En democracia, actores de vocación democrática los combaten dentro del estado de derecho. Es la única garantía para quienes no somos poderosos de que nuestros derechos e intereses serán respetados.

Bibliografía

Laclau, Ernesto (1978): "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política" en Julio Labastida Martín del Campo, *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, México, Siglo XXI.

Lander, Edgardo (1995): *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*, Caracas, Ediciones de la UCV.

López Maya, Margarita (2002): "Entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita" en *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, enero, p. 97-103.

López Maya, Margarita y Luis E. Lander (2001): "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998" en Emir Sader (comp.), *El ajuste estructural en América Latina*, Buenos Aires, Clacso-Asdi, p. 231-254.

Moore, Barrington jr. (1978): *Injustice. The Social Bases of Obedience & Revolt*, EEUU, The Macmillan Press Ltd.

(*) Historiadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales.

1 Estos artículos se refieren, el primero, al deber de la ciudadanía de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución. El segundo, da derecho a los ciudadanos de desconocer cualquier régimen que contraría los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.